

Cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales en el sector rural y en zonas de conflicto armado¹

Óscar Espinosa, investigador Cámara Técnica de Riesgos Laborales
Fasecolda

El presente escrito tiene por finalidad hacer un análisis cuantitativo del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) en el sector rural colombiano.

En este escrito se estudian las coberturas del SGRL en los municipios más afectados por el conflicto armado en el país. Retomando el reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, son irrefutables los diversos efectos positivos que pueden llegar a tener los sistemas de protección social sobre las unidades familiares rurales (FAO, 2015, p. 42):

Estos efectos van desde la mejora de los recursos humanos, un mayor nivel de ahorro y de acceso al crédito, el aumento de las inversiones y de la producción agrícolas y no agrícolas, mayor flexibilidad a la hora de asignar tareas domésticas, el fortalecimiento de las redes sociales y los multiplicadores de los ingresos en la economía local.

1. Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) en el sector rural

En Latinoamérica, incluyendo Colombia, generalmente los principales sectores económicos de las zonas rurales son la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura. Este tipo de actividades se caracterizan por su desarrollo en pequeños establecimientos, con bajos niveles de inversión y escasa tecnificación en sus procesos de industrialización (Prevalia CGP, 2009).

En el 2015, el SGRL protegió a 344.935 trabajadores del sector rural. Es decir que a este número de personas se les prestaron los servicios de asesoría especializada en prevención de riesgos labo-



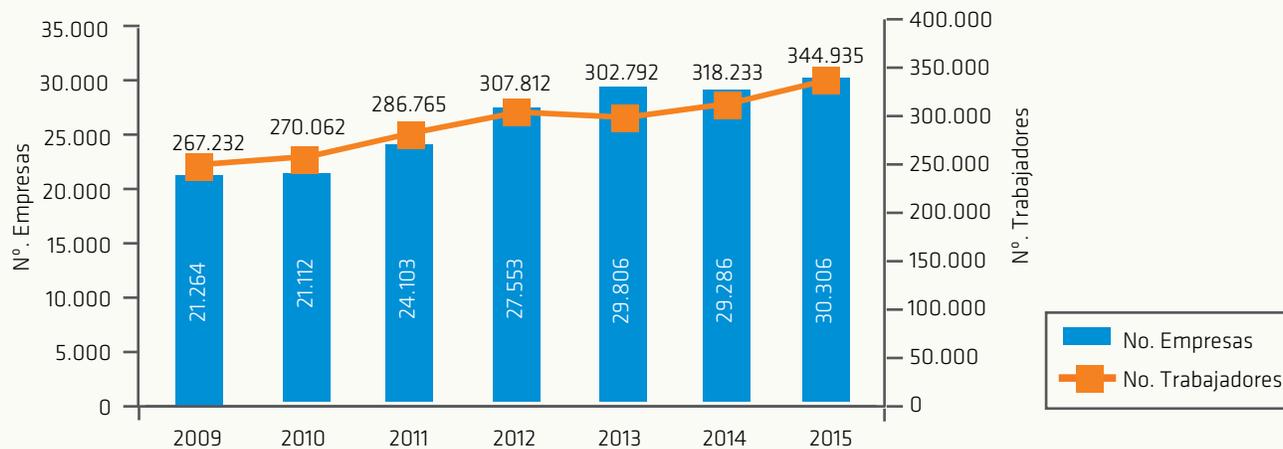
rales, prestaciones asistenciales (asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, etc.) y prestaciones económicas (pensión de invalidez y de supervivencia, incapacidad temporal, auxilio funerario, etc.).

En los seis últimos años (2009-2015) los trabajadores rurales protegidos por el SGRL han crecido a una tasa promedio anual del 4.4%, mientras los empresarios afiliados tuvieron un incremento anual promedio del 6.3% (figura 1). Por otra parte, en este mismo periodo de análisis los trabajadores dependientes han representado más del 98% del total

➔ En los seis últimos años (2009-2015) los trabajadores rurales protegidos por el SGRL han crecido a una tasa promedio anual del 4.4%, mientras los empresarios afiliados tuvieron un incremento anual promedio del 6.3% (figura 1).

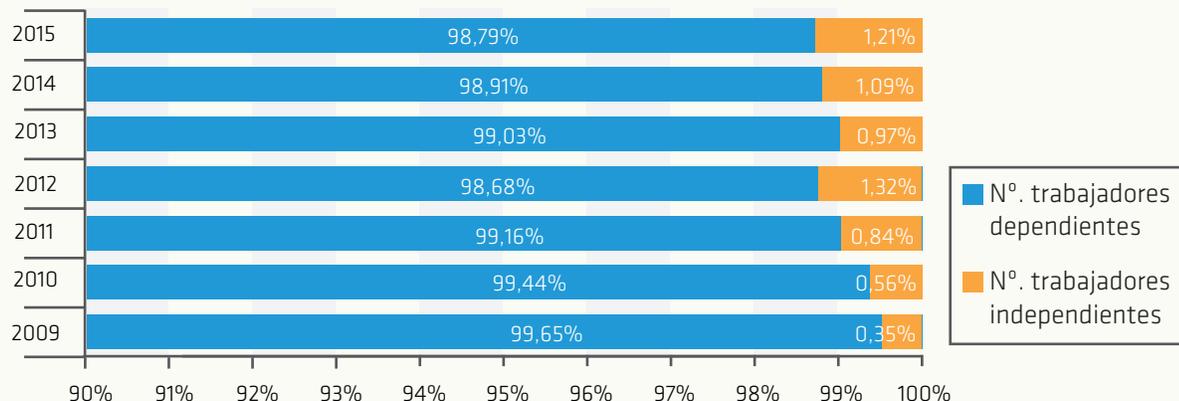
1. El autor agradece a Juan Pablo Araújo, Juan Carlos Aristizábal y Hernán Avendaño por los comentarios realizados a versiones anteriores de este escrito.

Figura 1: Número de empresas y trabajadores rurales afiliados al SGRL, periodo 2009-2015.



Fuente: Estadísticas presidenciales Fasecolda, información enviada por las compañías de seguros. Análisis de Fasecolda. Información extraída el 16 de febrero 2016.

Figura 2: Participación de trabajadores dependientes e independientes afiliados al SGRL en «agricultura, ganadería, caza y silvicultura», periodo 2009-2015.



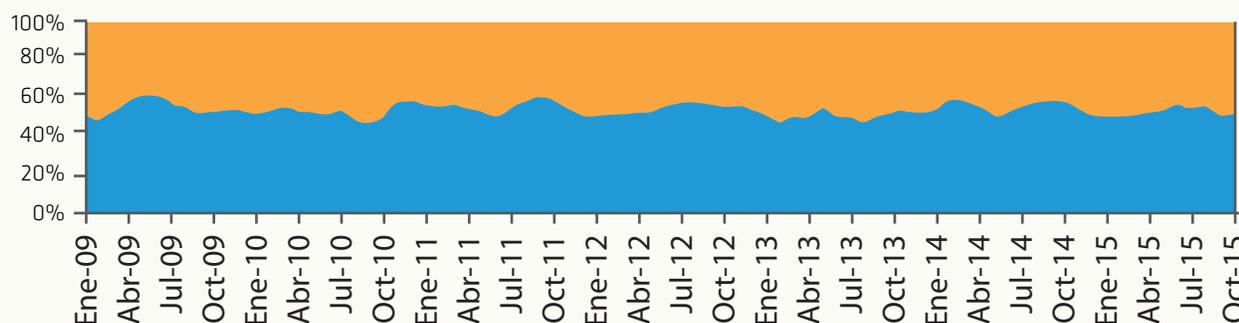
Fuente: Estadísticas presidenciales Fasecolda, información enviada por las compañías de seguros. Análisis de Fasecolda. Información extraída el 16 de febrero 2016.

de empleados asegurados por el SGRL (figura 2), señal indicativa de que la mayoría de trabajadores del sector rural que no se encuentran vinculados laboralmente con un empleador mediante un contrato de trabajo no cuentan con cobertura en riesgos laborales.

A partir de la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la figura 3 enseña las participaciones de los trabajadores formales e informales sobre el total de ocupados para el sector «agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura»²,

2. Aunque sería ideal tener el cociente entre el número de trabajadores afiliados al SGRL y la población ocupada en tal sector, no es posible dado que la subdivisión de sector económico del DANE es diferente a la definida por las bases de datos del SGRL.

Figura 3: Porcentaje de trabajadores formales e informales en el sector «agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura», 23 ciudades y áreas metropolitanas, periodo 2009-2015 (trimestre móvil).



Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. «Anexo informalidad». Información extraída el 19 de febrero 2016.

Tabla 1: Indicadores de siniestralidad en el Sistema General de Riesgos Laborales, para «agricultura, ganadería, caza y silvicultura» en Colombia, periodo 2009-2015.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa de AT*	13,42	13,43	14,93	18,78	19,65	19,17	18,49
Tasa de EL**	278,04	423,61	336,86	364,83	379,47	397,82	285,27
Tasa muerte por AT**	10,85	8,52	13,95	11,7	15,52	10,37	10,73
Tasa muerte por EL**	0	0	0	0	0	0	0
Tasa invalidez por AT**	4,86	18,51	14,3	23,72	10,9	23,88	8,99
Tasa invalidez por EL**	0,75	0,37	1,05	0,97	0,33	1,57	1,45
Tasa de indemnizaciones por AT**	112,64	249,57	190,4	217,34	200,47	241,33	226,42
Tasa de indemnizaciones por EL**	43,03	82,57	85,09	107,86	98,09	108,73	128,14

* Tasa por cada 100 trabajadores; ** Tasa por cada 100.000 trabajadores.

Fuente: Estadísticas presidenciales Fasecolda, información enviada por las compañías de seguros. Análisis Fasecolda. Información extraída el 16 de febrero 2016.

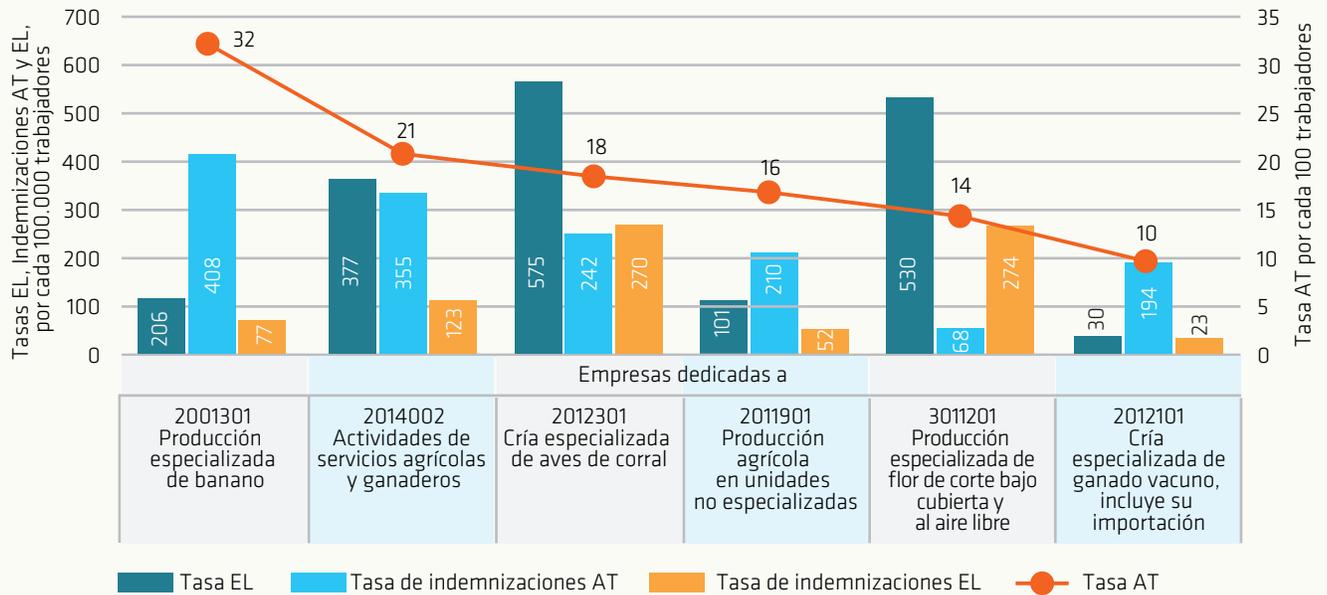
para 23 ciudades y áreas metropolitanas, donde se observan comportamientos volátiles para ambas series. La informalidad ostenta en la mayoría de meses niveles superiores al 50% sin embargo, no hay una dinámica definida a lo largo del tiempo. Tal comportamiento muestra las dificultades intrínsecas que se tienen en el sector rural para la formalización de este tipo de trabajadores.

Por otra parte, en la tabla 1 se presentan los principales indicadores de siniestralidad en riesgos laborales.

Es de resaltar la disminución de las enfermedades laborales (EL) y su nula severidad (mortalidad). De otro lado, las tasas de AT, invalidez por AT e indemnizaciones por AT, aunque disminuyeron en 2015 respecto al año inmediatamente anterior, siguen en niveles muy altos respecto a la media nacional (en 2015, la tasa de AT fue de 7,5 por cada 100 trabajadores).

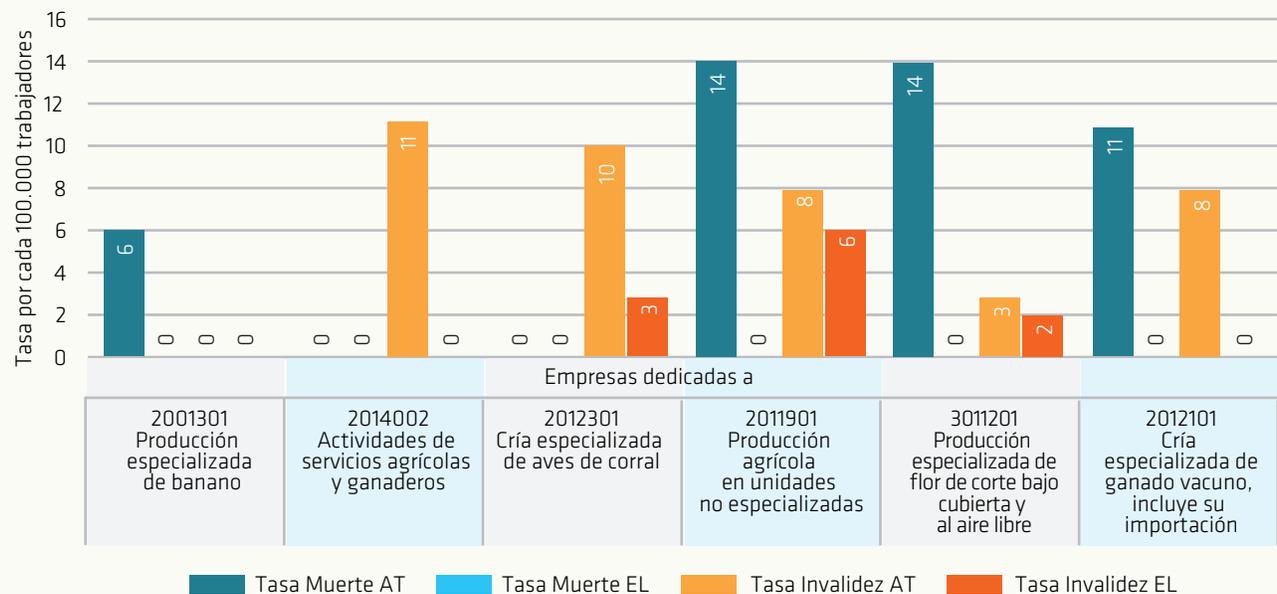
En las figuras 4 y 5 se presentan las estadísticas de siniestralidad para las seis actividades con mayor partici-

Figura 4: Tasas de AT, de EL e indemnizaciones por AT y por EL para las seis actividades más representativas del sector «agricultura, ganadería, caza y silvicultura». Año 2015.



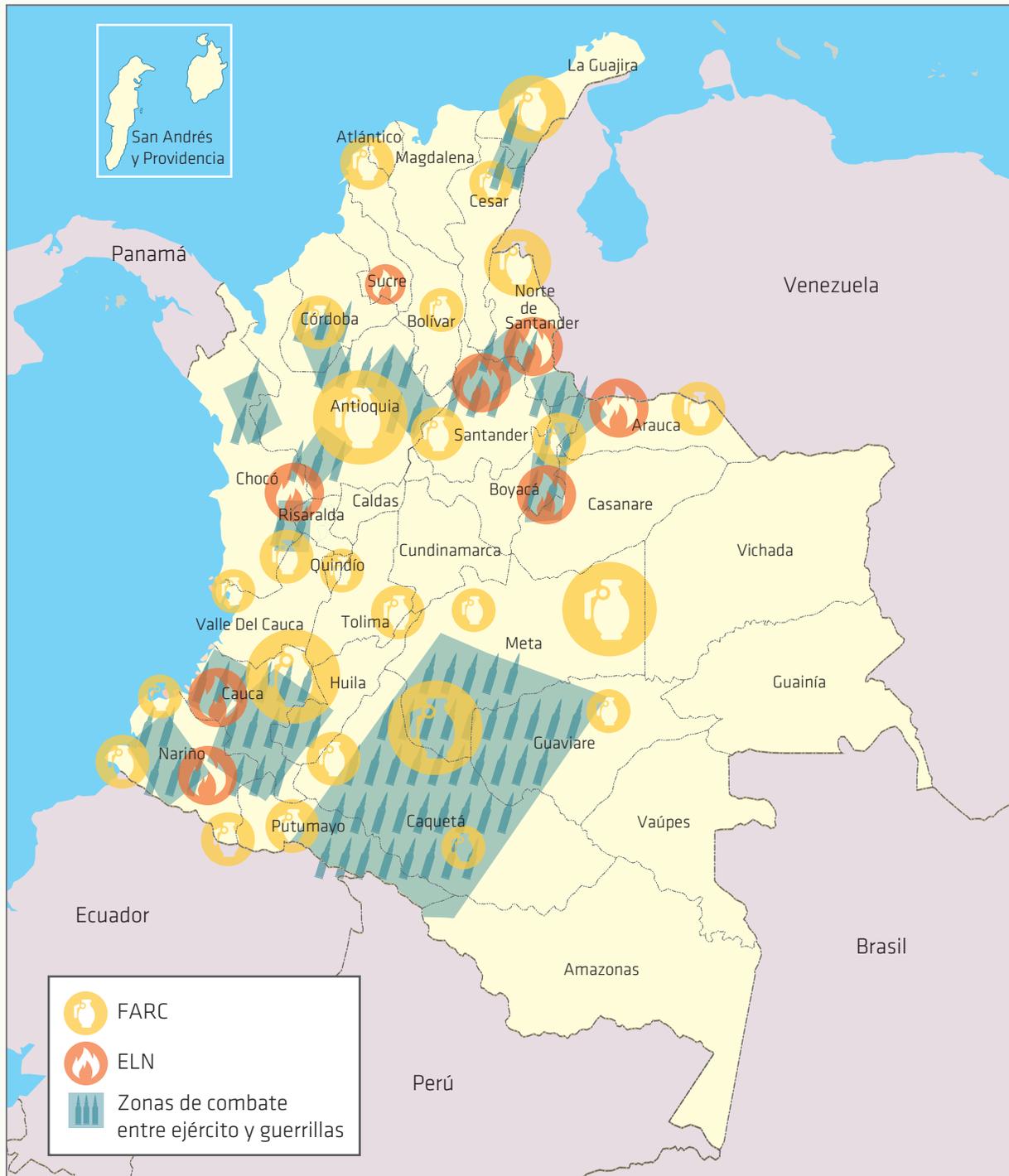
Fuente: Estadísticas presidenciales Fasecolda, información enviada por las compañías de seguros. Análisis Fasecolda. Información extraída el 16 de febrero 2016.

Figura 5: Tasa de pensiones: por muerte e invalidez, por AT y EL, para las seis actividades más representativas del sector «agricultura, ganadería, caza y silvicultura». Año 2015.



Fuente: Estadísticas presidenciales Fasecolda, información enviada por las compañías de seguros. Análisis Fasecolda. Información extraída el 16 de febrero 2016.

Figura 6: Áreas de constantes combates entre fuerzas oficiales y guerrillas.



Fuente: Imagen tomada de Baracaldo (2013).

pación según número de trabajadores afiliados en el sector «agricultura, ganadería, caza y silvicultura» (cuya representación supera el 65% sobre el total), entre estas las empresas dedicadas a la producción de banano, agricultura no mecanizada, cría especializada de ganado vacuno y aves de corral, servicios agrícolas y ganaderos, y producción especializada de flor de corte. De las gráficas se resalta que: i) la alta tasa de AT en la producción de banano llega a ser 4 veces la tasa de AT nacional; ii) hay altas tasas de mortalidad por AT en agricultura no mecanizada y en producción de flor de corte; y iii) se presentan altas tasas de EL e indemnizaciones por EL en la cría de aves de corral.

En términos generales, vale recordar que los trabajadores de estas actividades se exponen a diferentes riesgos ocupacionales de alto impacto en salud, como los cortes, la exposición a riesgos biológicos, las caídas, los posibles trastornos de la columna vertebral y la inhalación de plaguicidas vía cutánea y digestiva (Lizarazo et al., 2015, Franche et al., 2015).

Por esto, dada la materialización del riesgo y las altas tasas de siniestralidad, es vital que las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) aumenten sus programas de promoción y prevención en las zonas rurales, revisen los límites de exposición laboral basados en salud, apoyen la producción limpia, fortalezcan el asesoramiento en temas de prevención de la contaminación, entre otros aspectos, todos ellos necesarios para una mejor salud ocupacional en el sector rural, especialmente en lo relacionado con la producción del sector agro.

2. Cobertura actual del seguro de riesgos laborales en las zonas de mayor conflicto armado en Colombia

La violencia genera múltiples consecuencias negativas en todos los ámbitos del desarrollo colectivo. Autores como Cárdenas (2007), Restrepo y Aponte (2009) y Palmett

(2015), entre otros, han cuantificado el impacto negativo del conflicto sobre la productividad en el país y han demostrado los efectos perjudiciales sobre el crecimiento económico y la estabilidad laboral en los sectores primario y secundario de la economía nacional. Sánchez y Zenteno (2008) observan que el conflicto incrementó el desempleo un 1.5% en promedio entre los años 1994 y 2005. Adicionalmente, en términos de ingreso laboral, Durantón y Sánchez (2005) encontraron que el conflicto disminuyó el salario de los trabajadores menos capacitados y más pobres.

Bajo este contexto especial, la protección social puede influir positivamente en las decisiones que tengan que afrontar las familias de menores ingresos, especialmente las que viven en zonas rurales. Las medidas de protección social ayudan a gestionar los riesgos y a su vez mitigan el impacto negativo de su materialización. Es más, cuando se adoptan tales medidas de manera permanente, se incrementa la posibilidad de prever situaciones y se aumenta la seguridad en los hogares, promoviendo el trabajo digno y seguro en el campo (FAO, 2015).

La figura 6 presenta las zonas de mayor conflicto armado en el país. Gran parte de ellas son zonas rurales. Algunos de los departamentos más afectados son Arauca, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo.

Dentro de esta temática, es de resaltar la infografía desarrollada por Semana (2013), donde se muestra la geografía del conflicto armado colombiano, especificando los municipios donde se tiene mayor impacto negativo bajo los diferentes escenarios que ocasiona la violencia (desplazados, víctimas de minas, número de ataques, entre otros).

Con base en esta caracterización, en las tablas 2, 3, 4 y 5 se expone la cobertura del SGRL (para el 2015)³, como subsistema de la seguridad social colombiana, en algunos de los municipios que han sufrido las peores consecuencias de la violencia armada. Es posible observar que la cobertura del SGRL llega a las zonas de alto riesgo.

3. Lo ideal sería conocer la proporción de afiliados al SGRL respecto al total de ocupados en cada municipio; no obstante, la información del mercado laboral otorgada por el DANE no llega a estar segmentada a nivel de municipio.

Tabla 2: Cobertura de trabajadores del SGRL en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia: desplazamiento. Año 2015.

	Cobertura en riesgos laborales	Actividades de mayor importancia según participación de trabajadores afiliados al SGRL (% en paréntesis)
Buenaventura (Valle del Cauca)	36.741	Transporte, almacenamiento y comunicaciones (46%). Inmobiliario (10%)
El Carmen de Bolívar (Bolívar)	980	Servicios comunitarios, sociales y personales (19%). Educación (17%)
Tierralta (Córdoba)	961	Educación (36%). Administración pública y defensa (12%)
Riosucio (Chocó)	187	Administración pública y defensa (58%). Educación (22%)

Tabla 3: Cobertura de trabajadores del SGRL en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia: homicidio a líderes. Año 2015.

	Cobertura en riesgos laborales	Actividades de mayor importancia según participación de trabajadores afiliados al SGRL (% en paréntesis)
Valledupar (Cesar)	66.562	Inmobiliario (19%). Construcción (14%)
Riosucio (Caldas)	2.120	Servicios comunitarios, sociales y personales (25%). Servicios sociales y de salud (21%)
Tame (Arauca)	1.459	Transporte, almacenamiento y comunicaciones (27%). Construcción (21%)
Barbacoas (Nariño)	240	Servicios sociales y de salud (56%). Administración pública y defensa (20%)

Tabla 4: Cobertura de trabajadores del SGRL en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia: víctimas de minas. Año 2015.

	Cobertura en riesgos laborales	Actividades de mayor importancia según participación de trabajadores afiliados al SGRL (% en paréntesis)
Vistahermosa (Meta)	181	Construcción (24%). Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (23%)
San Vicente del Caguán (Caquetá)	1.046	Comercio (26%). Servicios sociales y de salud (14%)
San Carlos (Antioquia)	566	Eléctrico, gas y agua (25%). Servicios sociales y de salud (24%)
La Montañita (Caquetá)	91	Administración pública y defensa (65%). Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17%)

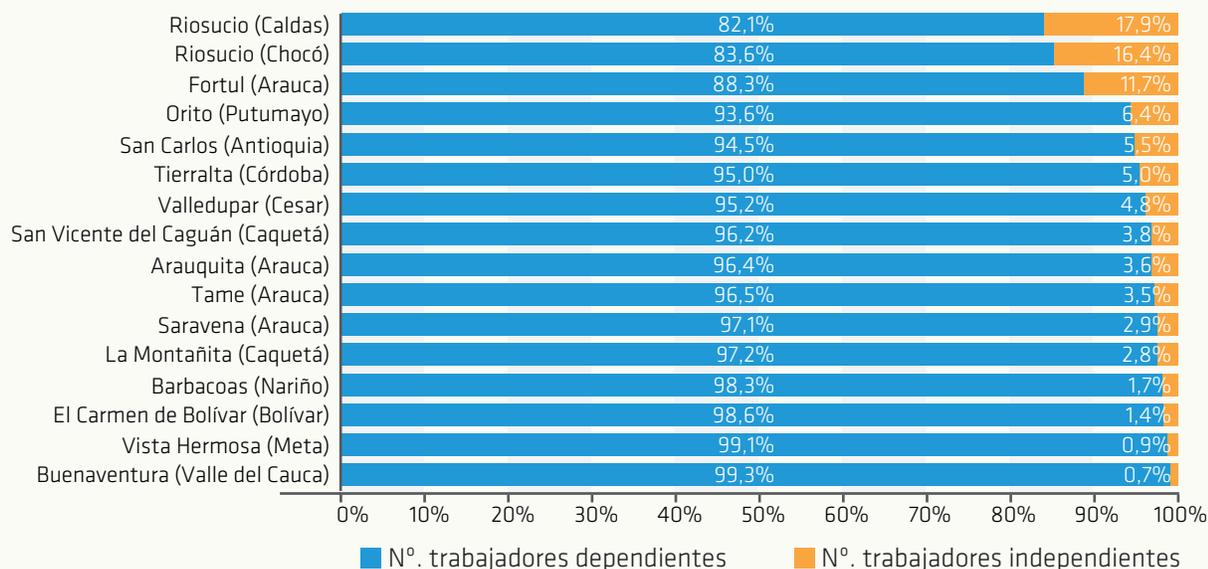
Fuente: Estadísticas presidenciales Fasecolda, información enviada por las compañías de seguros. Análisis Fasecolda. Información extraída el 16 de febrero 2016.

Tabla 5: Cobertura de trabajadores del SGRL en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia: número de ataques. Año 2015.

	Cobertura en riesgos laborales	Actividades de mayor importancia según participación de trabajadores afiliados al SGRL (% en paréntesis)
Saravena (Arauca)	2.899	Transporte, almacenamiento y comunicaciones (23%). Servicios sociales y de salud (21%)
Arauquita (Arauca)	549	Construcción (49%). Inmobiliario (24%)
Orito (Putumayo)	2.448	Transporte, almacenamiento y comunicaciones (27%). Construcción (25%)
Fortul (Arauca)	249	Administración pública y defensa (27%). Construcción (20%)

Fuente: Estadísticas presidenciales Fasecolda, información enviada por las compañías de seguros. Análisis Fasecolda. Información extraída el 16 de febrero 2016.

Figura 7: Distribución de trabajadores afiliados en el SGRL en las zonas más afectas por el conflicto armado en Colombia. Año 2015.



Fuente: Estadísticas presidenciales Fasecolda, información enviada por las compañías de seguros. Análisis Fasecolda. Información extraída el 16 de febrero 2016.

Para resaltar: i) en los municipios que evidencian mayor desplazamiento, los sectores económicos más representativos en afiliación al SGRL son «educación» y «administración pública y defensa»; ii) en los de más altos homicidios a líderes, sobresalen los sectores «construcción» y «servicios sociales y de salud»; iii) en los de mayores víctimas por minas se destacan «agricultura, ganadería, caza y silvicultura» y «servicios sociales y de salud»; por último, iv)

en las zonas de más ataques, los sectores económicos más relevantes por afiliación al SGRL son el de «construcción» y el de «transporte, almacenamiento y comunicaciones».

Se destaca, en términos generales, que en las zonas de mayor violencia en Colombia, generalmente de características rurales, las actividades económicas que más poseen trabajadores protegidos son las del sector terciario (servi-

cios y transporte). Hecho alarmante, dado que muestra la poca penetración del seguro de riesgos laborales en actividades de suma importancia en las zonas de campo como lo son la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura⁴. En este tipo de municipios, la mayoría alejados de metrópolis son escasos los trabajos con contrato legal. Tal y como se muestra en la figura 7, los empleados dependientes siempre representan más del 80% de afiliados al SGRL.

3. Conclusiones

Este artículo presenta un panorama general del ramo de riesgos laborales en el sector rural colombiano. Se observa que aunque en los últimos años ha crecido a buen ritmo el número de empresas afiliadas y de trabajadores protegidos, todavía hace falta un gran colectivo por cubrir. Las tasas de siniestralidad se encuentran por encima del promedio nacional (y de la mayoría de sectores económicos), lo que refuerza la idea de seguir dinamizando la importante inversión en programas de promoción, prevención y cultura del cuidado, que se ha venido haciendo por parte de las ARL, con el fin de controlar las altas tasas de ma-

➔ Se destaca, en términos generales, que en las zonas de mayor violencia en Colombia, generalmente de características rurales, las actividades económicas que más poseen trabajadores protegidos son las del sector terciario (servicios y transporte).

terialización. Finalmente, se evidencia la presencia del SGRL en las zonas de más alto conflicto armado en los últimos años. Se puede detallar que en estos municipios la mayor parte de trabajadores protegidos desarrollan actividades en los sectores de servicios y de transporte. 

4. Es importante destacar que el análisis hecho en este escrito se basa en el contexto de trabajadores rurales que devengan un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) o más. La cobertura de poblaciones que devengan menos de un SMMLV es un reto, dadas las condiciones especiales de este grupo en específico —con desconocida exposición al riesgo, que tienen por lugar de trabajo su mismo lugar de residencia, con escaso ingreso per cápita, etc—. Esta temática de nuevas poblaciones se está trabajando en la agenda actual de las ARL, junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en pro del beneficio de todos los colombianos y de la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social en el largo plazo.

Bibliografía:

- Baracaldo, D. (22 de julio de 2013). ¿Cuáles son las zonas ‘rojas’ por violencia en Colombia?. Artículo online, consultado el día 16 de febrero de 2016, disponible en <http://www.kienyke.com/politica/las-zonas-de-mas-violencia-en-colombia/>
- Cárdenas, M. (2007). Economic growth in Colombia: a reversal of fortune?. Documento de trabajo N°. 36, Fedesarrollo.
- Duranton, G. y Sánchez, F. (2005). Regional disparities in Colombia. Mimeo.
- Franche, R., Murray, E., Ostry, A., Ratner, P., Wagner, S. & Harder, H. (2010). Work disability prevention in rural healthcare workers. *Rural Remote Health*, 10(4), 1502.
- Lizarazo, C., Fajardo, J., Berrio, S. y Quintana, L. (2011). Breve historia de la salud ocupacional en Colombia. *Archivos de prevención de riesgos laborales*, 14(1), 38-42.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-. (2015). *El estado mundial de la agricultura y la alimentación. La protección social y la agricultura: romper el ciclo de la pobreza rural*. Roma, Italia: FAO.
- Palmett, L. (2015). El impacto del posconflicto en el sector agrario colombiano, un análisis desde la gestión pública. Trabajo de especialización, Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia.
- Prevalia CGP. (2009). *La prevención de riesgos laborales y la mujer rural*. Madrid, España: Cursoforum S.L.U.
- Restrepo, A. & Aponte, D. (Ed.). (2009). *Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones*. Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Sánchez, F. & Zenteno, Y. (2008). Crecimiento y conflicto armado en Colombia 1994-2004. Una aproximación con variables instrumentales. Mimeo.
- Semana. (2013). Infografía: los 100 municipios críticos. Artículo online, consultado el día 16 de febrero de 2016, disponible en <http://www.semana.com/especiales/proyectovictimas/100-municipios-criticos/index.html>